

Santiago, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle, por sentencia de veintidós de junio de dos mil veintitrés, en los antecedentes RUC N°: 2210004532-3, RIT N°: 42-2023 condenó a Cristofer Andrés Campos Campusano, como autor de un delito consumado de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 196 en relación con los artículos 108, 109, 110 y 111, todos de la Ley 18.290 del Tránsito, cometido el día 26 de diciembre de 2021, en la comuna de Ovalle, a sufrir la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, multa de ocho unidades tributarias mensuales, concediéndole ocho cuotas para su pago, venciendo la primera el último día del mes siguiente al que quede ejecutoriada la presente sentencia; la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, el comiso del vehículo marca Toyota, modelo Yaris XLI 1.5, año 2006, color blanco, P.P.U. YJ-5529, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos, durante el tiempo de la condena. Debiendo cumplir la pena impuesta en libertad vigilada intensiva, en suspenso durante UN AÑO, tiempo que el condenado deberá cumplir la pena impuesta de manera EFECTIVA, debiendo abonarse a su cumplimiento el tiempo que ha permanecido ininterrumpidamente privado de libertad en esta causa, desde el 22 de julio de 2022

La parte querellante y el Ministerio Público dedujeron recursos de nulidad contra la indicada sentencia, el que se conoció en la audiencia pública del nueve de agosto pasado, convocándose a los intervinientes a la lectura del fallo para el día de hoy, como consta del acta de la misma fecha.



Considerando:

Primero: Que el recurso de la querellante esgrime únicamente la causal de nulidad contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, fundada en una errónea aplicación del derecho que influyó en lo dispositivo del fallo.

Indican que la errónea aplicación del derecho se configura al no aplicar el artículo 75 del Código Penal, entendiendo que estamos frente a un concurso ideal que se resuelve al tenor de la norma recién transcrita del Código Penal (un solo hecho típico con resultado múltiple) y en cambio de modo erróneo aplicar el artículo 196 bis N° 2 de la ley 18.290 al momento de determinar la pena por el delito del artículo 110 en relación al artículo 196 de la ley 18.290.-

Agrega que en la acusación fiscal, a la cual adhirió, se calificó al delito como un concurso ideal de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones graves, en grado de desarrollo consumado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 196 de la Ley de Tránsito, pues se trataría de una figura penal en la que con un solo hecho se realizan las exigencias de dos o más tipos delictivos o de uno mismo varias veces (Cury, Enrique, Derecho Penal, Parte General, 7ª edición, pág. 663), situación que nuestra legislación contempla y regula expresamente en el artículo 75 del Código Penal, norma que establece que en estos casos solo se impondrá la pena mayor asignada al delito más grave.

Pide que se declare nulo el Juicio Oral y la sentencia recurrida ya que en su pronunciamiento ha existido errónea aplicación del derecho que ha influido en lo sustantivo del fallo.

Segundo: Que el Ministerio Público alega como única causal de su recurso, la contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal,



fundada en una errónea aplicación del derecho que influyó en lo dispositivo del fallo.

Indica que en el pronunciamiento de la sentencia recurrida, el Tribunal ha realizado una errónea aplicación del derecho al considerar que en este caso existe un concurso aparente de leyes penales, ya que tratándose de un delito agravado o calificado por el resultado, el hecho de haberse producido más de uno de los resultados contemplados en el tipo penal, no trae como consecuencia la existencia de un delito independiente por cada uno de los resultados producidos a consecuencia de una sola conducta desplegada por el encartado, concurso aparente que debe ser resuelto a la luz del principio de consunción, debiendo aplicarse la pena establecida para el resultado más grave, en este caso, la muerte de dos personas, prevista en el inciso 3 del artículo 196 ya referido y no considerar un concurso ideal de delitos de conformidad a lo establecido en el artículo 75 del Código Penal, incurriendo además en una errónea aplicación del derecho respecto de la determinación de la pena, de conformidad al artículo 196 inciso 3 de la Ley de Tránsito, al hacer aplicable esta norma en este caso en la que se acreditó resultados múltiples, imponiendo la pena de cinco años, pues entiende que esta norma legal se encuentra establecida para los casos de manejo en estado de ebriedad con un resultado singular de muerte, lo que no ocurre en estos hechos acreditados

Pide que se declare nula la sentencia recurrida y, de conformidad con el artículo 385 del Código Procesal Penal, se dicte, sin nueva audiencia pero separadamente, sentencia de reemplazo de conformidad a la ley, reconociendo la aplicación del artículo 75 del Código Penal, tratándose de un concurso ideal de delitos, aplicando de esta forma la pena de presidio mayor en su grado



mínimo, de conformidad al artículo 110 inciso 2° en relación al artículo 196 inciso 3° de la Ley de Tránsito.

Tercero: Que los hechos establecidos por el considerando noveno de la sentencia recurrida son los siguientes:

“El día 26 de diciembre de 2021, alrededor de las 06:53 horas, en circunstancias que Cristofer Andrés Campos Campusano, conducía no atento a las condiciones de tránsito del momento y en estado de ebriedad, con una dosificación de 1,035 gramos por mil de alcohol en la sangre, el vehículo tipo automóvil, marca Toyota, modelo Yaris XLI 1.5, año 2006, color blanco, P.P.U. YJ-5529, por la Ruta D-505, a la altura del kilómetro 5, comuna de Ovalle, en dirección al oriente, en compañía de doña Isidora Katalina Gloria Véliz Carvajal; de doña Javiera Estefanía Araya Bolvarán; de doña Tiare Constanza Rojas Bolvarán; y de doña Maira Yancol Silva Bolvarán; perdió el control y maniobrabilidad de dicho vehículo desviando su desplazamiento hacia la derecha, chocando con la solera de dicha vía, para luego desviar su trayectoria hacia la izquierda, chocando con un pilar de concreto y un portón de un muro perimetral existente en el lugar, volcando y chocando contra una pirca, continuando con dicho volcamiento y desplazamiento hasta detenerse en la vía. A consecuencia de lo anterior, las acompañantes y víctimas referidas resultaron: doña Isidora Katalina Gloria Véliz Carvajal, fallecida a causa de un politraumatismo de alta energía, accidente de tránsito; doña Javiera Estefanía Araya Bolvarán, fallecida a causa de un politraumatismo de alta energía, accidente de tránsito; doña Tiare Constanza Rojas Bolvarán, con politraumatismo de carácter grave; y doña Maira Yancol Silva Bolvarán, con politraumatismo de carácter grave”.



Cuarto: Que tales hechos fueron calificados como constitutivos del delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, con resultado de muerte y lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 196 en relación con los artículos 108, 109, 110 y 111, todos de la Ley 18.290 del Tránsito, en grado de consumado.

En cuanto a la determinación de la pena, la sentencia, en su considerando décimo cuarto señala *“Que, así las cosas, respecto de delito de manejo en estado de ebriedad causando muerte y lesiones, concurriendo dos circunstancias atenuantes de responsabilidad penal y no concurriendo agravantes, de conformidad a lo señalado en el artículo 196 bis N° 2 de la Ley 18.290, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo, dentro del cual se regulará en su máximo, considerando la gran extensión del mal causado con el delito, de conformidad a lo señalado en el artículo 69 del Código Penal, no solo por el número de personas fallecidas y lesionadas, sino que además por el gran dolor y sufrimiento que ha provocado estos resultados tanto en los familiares de las dos personas fallecidas, de lo cual dieron cuenta en el juicio familiares cercanos, como asimismo los padecimientos que hasta la actualidad persisten en las dos víctimas lesionadas, de lo cual dieron cuenta ellas mismas, avaladas por la documental incorporada por el ente persecutor, en la que consta no solo la entidad de las lesiones sufridas, sino que también los distintos tratamientos que han debido someterse a consecuencia de tales lesiones”*.

Para luego agregar *“...Se desestiman las alegaciones de los acusadores en orden a aplicar el artículo 75 del Código Penal para determinar la pena, toda vez que el Tribunal estimó que no estamos ante un concurso ideal de delitos, tal como se razonó en el motivo undécimo”*.



Quinto: Que, esta Corte comparte lo razonado por los sentenciadores, en orden a estimar que en la especie estamos frente a un concurso aparente de leyes penales, de modo que el quantum de la pena impuesta, se ajusta a derecho.

Se ha de tener presente que la institución denominada “concurso aparente de leyes penales”, respecto de la cual el impugnante reclama su aplicación, la doctrina señala que “... *se habla en cambio de concurso de leyes cuando uno o varios hechos son incluíbles en varios preceptos penales de los que sólo uno puede aplicarse, puesto que su estimación conjunta supondría un bis in ídem. Ello sucede siempre que uno de los preceptos basta por sí solo para aprehender todo el desvalor del hecho o hechos concurrentes. Concurre entonces un solo delito*” (Mir Puig, Santiago, Derecho Penal, Parte General, séptima edición, pág. 646).

Por su parte Roxin indica que “*de concurso de leyes se habla cuando, aunque es cierto que formalmente se han realizado varios tipos, empero mediante el castigo por uno de esos tipos ya se ha retribuido y saldado completamente el contenido de injusto o ilícito y de culpabilidad del suceso*” (Roxin, Claus, Derecho Penal, Parte General, tomo II, pág. 997).

Para otros autores, el concurso de leyes “*se da cuando una acción u omisión está comprendida en varios tipos delictivos pero sólo se puede aplicar uno de ellos, porque comprende ya la totalidad de lo injusto de la conducta realizada por el sujeto*” (Cerezo Mir, José, Derecho Penal, Parte General, Pág. 1.036).

En la doctrina nacional, Cury señala que “*hay un concurso aparente de leyes penales cuando un hecho parece satisfacer las exigencias de dos o más tipos diversos, pero, en definitiva, solo será regulado por uno de ellos, en tanto*



que los demás resultarán desplazados por causas lógicas o valorativas” (Cury Urzúa, Enrique; Derecho Penal, Parte General, pág. 667).

Que se debe tener presente el principio *non bis in ídem*, ya que esta prohibición encuentra su mayor implicancia práctica, en aquellas situaciones en que un mismo hecho satisface dos o más descripciones delictivas y se debe determinar, justamente, si la aplicación -externa- de todas estas resulta permitida, como pretenden los recurrentes.

En el concurso aparente, el contenido debe ser dotado a partir de la concreción del principio *non bis in ídem*, específicamente en su variante de prohibición de doble valoración o sobrevaloración, que se traduce en una concreción de la prohibición de exceso, derivada esta a su vez, del principio de proporcionalidad. En este sentido, el principio *non bis in ídem*, resulta vinculante directamente para el sentenciador, el que debe determinar, si existen antecedentes normativos que permitan concluir que la valoración doble del hecho o aspectos del hecho, signifique una mera reiteración, en razón de que concurra una relación de redundancia punitiva circunstancial entre los tipos penales concurrentes, la que permitiría desplazar a una de las normas de sanción de los mismos, ya que su aplicación conjunta vulneraría la prohibición de doble valoración.

Sexto: Que no es materia de controversia, que se está frente a una acción única, con pluralidad de resultados, que se encuadran en las figuras típicas de manejo en estado de ebriedad, causando dos muertes y dos lesionados graves, lo debatido es si, para efectos de determinar la pena, se aplica la norma general del artículo 75 del Código Penal o, tal como se concluye en la sentencia recurrida debe preferirse para determinar la penalidad, la norma del artículo 196 bis de la Ley de Tránsito.



Séptimo: Que, el artículo 196 bis de la Ley 18.290, indica a los sentenciadores un marco de pena aplicable al delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, independientemente de los resultados provocados por dicha conducta. Teniendo presente lo anterior, el artículo 196 bis señala las reglas que deben aplicarse para determinar la pena dentro de ese rango legal y específicamente el N° 2 se refiere al caso que concurran una o más circunstancias atenuantes, señalando que en ese evento debe aplicarse la pena de presidio menor en su grado máximo, tal como se hizo en el fallo recurrido.

Que teniendo presente lo señalado, en relación a utilizar el principio non bis in ídem como criterio para la aplicación del principio de la consunción, y concluir que estamos frente a concurso aparente de leyes penales, debemos tener presente el artículo 196 bis N° 2 de la Ley 18.290, ya que dicha norma establece el marco penal por el cual el legislador optó para sancionar la conducta de manejo en estado de ebriedad causando muerte o lesiones graves, sin que le sea posible a los jueces salir de dicho marco penal a menos, como indica la norma, que nos encontremos en la hipótesis del numeral 5 de la norma citada que prescribe *"5.- El tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor al marco fijado por la ley. Con todo, podrá imponerse la pena inferior en un grado si, tratándose de la eximente del número 11 del artículo 10 del Código Penal, concurriere la mayor parte de sus requisitos, pero el hecho no pudiese entenderse exento de pena."*

Octavo: Que en base a lo razonado, no se divisa la infracción de derecho denunciada por el recurrente, por lo que el recurso de nulidad deberá ser rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373 letra b), 377 y 384



del Código Procesal Penal, **se rechazan** los recursos de nulidad deducidos por la parte querellante y el Ministerio Público en contra de la sentencia de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle, y en contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC N°: 2210004532-3, RIT N°: 42-2023, los que, en consecuencia, no son nulos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Letelier.

Rol N° 147.495-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., la Ministra Suplente Sra. Eliana Quezada M., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. No firma la Ministra Sra. Letelier y la Abogada Integrante Sra. Tavorari, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y ausente, respectivamente.



En Santiago, a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

